

Decálogo de recomendaciones para la reconstrucción tras la dana de Valencia

Publicada 25 enero 2025 02:14h

Hace escasos días que el Ivie difundió un informe en el que he participado sobre el alcance económico de la dana del 29 de octubre en Valencia. Además de aportar información sobre las variables económicas que deben centrar la atención en los diagnósticos y en la reconstrucción, ofrece recomendaciones que confío sean de ayudar a la hora de acometer la tarea de reconstrucción y minimizar el impacto de potenciales eventos climatológicos extremos que puedan repetirse en el futuro. Sintetizo a continuación esas recomendaciones en forma de decálogo.

1. La estimación de las pérdidas de activos debe ser la referencia fundamental para cuantificar la necesidad de ayudas directas para la reconstrucción. Además de que el PIB presenta limitaciones a la hora de medir el impacto de la dana sobre la renta (al ser una magnitud bruta que no descuenta el elevado importe de los activos que de forma súbita se han deteriorado y hay que amortizar), el impacto es muy superior en la riqueza, es decir, en el valor de los activos que se han destruido. El informe los cuantifica en al menos 17.000 millones de euros.
2. Es fundamental que las ayudas tengan la cuantía y que lleguen lo antes posible para responder a la magnitud de la riqueza perdida. Si tenemos en cuenta el balance que ha hecho la AIREF de las ayudas anunciadas y que se materializan en fondos no reembolsables (unos 11.000 millones de euros), esta cifra se sitúa muy por debajo de las pérdidas que ha ocasionado la dana.
3. Debe ser el Estado el que asuma la mayor parte del coste de la reconstrucción dado que la Comunitat Valenciana parte de un elevado nivel de endeudamiento que se explica mayoritariamente por la infrafinanciación que padece desde hace años del sistema de financiación autonómica.
4. El plan de reconstrucción debe tener en cuenta la dimensión económico-social del área afectada por la dana y las diferencias en la intensidad del impacto entre municipios y sectores. Los 15 municipios de la zona cero deben ser los prioritarios en el cronograma, dado que el 77% de su superficie ha sido inundada y en esos municipios reside el 10% de la población de la provincia de Valencia y se ubica el 8% del VAB y el empleo de la provincia.

5. Es necesario construir un sistema de indicadores que permita hacer un seguimiento de la recuperación y focalizar los recursos en las áreas y sectores más afectados.
6. Hay que aprovechar el potencial que tienen las nuevas herramientas de análisis (como las de georreferenciación) para realizar un diagnóstico completo, detallado y riguroso del impacto de la dana. Esas herramientas, además, son de utilidad para concretar las inversiones preventivas que conviene realizar en el futuro.
7. Es conveniente anunciar un plan de acción para prevenir y amortiguar los daños de futuros eventos climatológicos extremos, que infunda confianza en los inversores. Esa confianza es necesaria tanto en aquellos casos en la que la destrucción de activos ha sido parcial, como más aún cuando ha sido total y la reconstrucción se plantee en nuevas zonas no inundables. El objetivo del plan es que disminuya la probabilidad de que una zona sea inundada.
8. Es necesario revisar en el futuro el ranking de prioridades de distribución del gasto público, de forma que adquiera más relevancia la inversión frente al gasto corriente. El ajuste presupuestario tras la Gran Recesión intentó proteger el gasto social, pero pasó una enorme factura en las inversiones públicas hidráulicas, que son necesarias tanto para prevenir futuros eventos climatológicos como para dar confianza a la inversión privada. El recorte de la inversión fue de tal calibre que han sido insuficiente para cubrir la amortización de los activos, de forma que en la actualidad el valor neto de esos activos es inferior al que teníamos hace más de una década. Por tanto, es imprescindible aumentar el esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas, de forma que permita tanto amortizar las que se deterioran como construir otras nuevas que son necesarias para minimizar la exposición a los riesgos que suponen los fenómenos climatológicos extremos.
9. Hay que aprovechar la estrategia de recuperación para modernizar y mejorar el tejido productivo valenciano, sobre todo teniendo en cuenta el problema estructural y generalizado de baja productividad que en parte explica que la Comunitat Valenciana tenga un PIB por habitante casi un 15% por debajo del de España. Esa estrategia es más factible en aquellos casos en los que la destrucción de activos ha sido más intensa. Los fondos NGEU que se han anunciado para Valencia con motivo de la dana son una oportunidad para la mejora de la productividad (en gran parte se destinan a la digitalización) y la eficiencia energética.
10. Las inversiones materiales de prevención en infraestructuras deben ser complementadas con otras intangibles, que permitan contar con una potente organización de respuesta a las emergencias. Esas inversiones se materializan en formación del personal especializado y entrenamiento de la ciudadanía para que sepan cómo reaccionar frente a una catástrofe. De poco sirve que salte una alarma en los móviles de la ciudadanía si no saben cómo actuar o actúan de forma errónea (como permanecer en la vivienda si es una planta baja).

***** Joaquín Maudos es catedrático de economía de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF.**